Radicado: 05001 31 03 **019 2022 00027 00**

Procedimiento: Conflicto negativo de competencia.

Proponente: Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín.

Convocado: Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín

JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Medellín, cuatro de febrero de dos mil veintidós

Referencia: Conflicto de competencia
Radicado: 0500131030**1920220002700**
Convocante: Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín.
Convocado: Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín
Decisión: Determina competencia sobre el **Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín**. Competencia factor territorial en procedimiento ejecutivo por cobro de cuotas de administración de inmueble sometido a régimen de propiedad horizontal.

Procede el Despacho a decidir el conflicto de competencia negativo propuesto por el **Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín** frente al **Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín**, en los siguientes términos.

1. ANTECEDENTES

Para el **20 de octubre de 2021** (Cfr. Fl. 5 Archivo 03), a través de gestora judicial, la propiedad horizontal **Edificio Catalejo Beta P.H.** promovió proceso ejecutivo de mínima cuantía en contra de **Adriana María López Correa**, en virtud a que ésta es propietaria de dos inmuebles en el referido conjunto residencial (inmuebles con F.M.I Nro. **001-999556** y **001-999398**) y desde el mes de enero de 2019 a la fecha de presentación de la demanda adeuda unas sumas de dinero por concepto de “*cuotas por pago del servicio de administración ordinarias y extraordinarias, gastos de administración e sus intereses*” (Cfr. Hechos 3 y 4 Demanda – Fl.6 Archivo 03). La competencia fue sustentada por la apoderada judicial del extremo activo desde el domicilio de la parte demandada.

El **Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín**, por auto del **25 de octubre de 2021** (Cfr. Archivo 04), rechazó la pretensión de ejecución formulada en razón a la falta de competencia para asumir el conocimiento del trámite incoado. Para tal efecto, sustentó esa Judicatura que del acápite de competencia del escrito genitor se desprendía que el demandante había definido la misma observando el lugar de domicilio de la parte ejecutada, la cual se ubica en la comuna 7 de la ciudad de Medellín, por lo que concluyó remitiendo el proceso de la referencia ante el **Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín**, dado que éste era el Despacho Judicial al que se le había asignado la comuna aludida (Cfr. Acuerdo CSJNTA19-205 del 24 de mayo de 2019).

Radicado: 05001 31 03 019 2022 00027 00

Procedimiento: Conflicto negativo de competencia.

Proponente: Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín.

Convocado: Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín

Arribado el procedimiento de la referencia ante el **Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín**, este Despacho rehusó del conocimiento de la causa ejecutiva aludiendo a que el factor territorial se regía en este asunto por el numeral 7° del artículo 28 del CGP como fuero privativo, y para tal efecto apoyó argumentalmente esta tesis con citas de autos de la H. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En ese orden, se propuso el conflicto negativo de competencia, y se remitió ante los Juzgado Civiles del Circuito de Medellín (Reparto), para su correspondiente resolución.

2. CONSIDERACIONES

El Código General del Proceso, en su artículo 28, determina que el juez competente en los procesos contenciosos, por regla general, es el juez del domicilio del demandado. Igualmente, en el numeral 3 del artículo mencionado consagra que en los procesos originados en negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Por su parte el artículo 17 del CGP en su párrafo indica que cuando en el lugar exista juez municipal de pequeñas causas y competencia múltiple, corresponderá a este los asuntos consagrados en los numerales 1,2 y 3 de dicho artículo, dentro de los cuales se consagra aquellos contenciosos de mínima cuantía.

3. CASO CONCRETO

En el asunto que nos convoca y una vez analizadas las circunstancias que dieron origen al presente conflicto de competencia es preciso indicar que el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PSAA14-10078 del 14 de enero de 2014 creó los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple el cual fue modificado por los Acuerdos PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 y PSAA15-10412 del 26 de noviembre de 2015.

En virtud de las directrices señaladas en los mencionados Acuerdos el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia expidió los Acuerdos CSJAA14-472¹ del 17 de septiembre de 2014, CSJANTA17-2172² del 10 de febrero de 2017, CSJANTA17-2207³ del 2 de marzo de 2017; CSJANTA17-2332⁴ del 06 de abril

¹ "Por medio del cual se define las comunas que atenderán los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple en Medellín creados mediante Acuerdo No. PSAA14-10195"

² "Por medio del cual se definen las zonas que atenderá los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín y Bello creados mediante Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, modificado por el Acuerdo PSAA15-10412 del 26 de noviembre de 2015 y se establecen directrices para su funcionamiento"

³ "Por medio del cual se reglamenta la atención y recepción de acciones de tutela que se presenten en los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Medellín y Bello creados mediante Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, modificado por el Acuerdo PSAA15-10412 del 26 de noviembre de 2015 y se establecen otras directrices"

⁴ "Por medio del cual se imparten directrices para el funcionamiento de los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín y Bello creados mediante Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, modificado por el Acuerdo PSAA15-10412 del 26 de noviembre de 2015"

de 2017 y el Acuerdo CSJANTA19-205 del 24 de mayo de 2019⁵, en los cuales se definieron las zonas que atenderían cada uno de los Juzgados que fueron creados.

Ahora para el caso que nos ocupa y atendiendo la normatividad que anteriormente fue citada, se debe tener presente que para los procesos donde se encuentra involucrados títulos ejecutivos, la legislación procesal brinda la posibilidad de formular la demanda tanto en el domicilio del demandado (Numeral 1° Art. 28 CGP), como en el sitio de cumplimiento de las obligaciones (Numeral 3° Art. 28 *eiusdem*); por lo que ambos fueros de competencia resultan concurrentes y a elección del promotor de la pretensión en punto de la definición del juez natural de la causa.

De este modo, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha sido diáfana al indicar que “La escogencia de entre uno y otro fuero, el negocial o el personal, es cuestión que le incumbe exclusivamente al promotor, por tratarse de una competencia concurrente o a prevención”⁶.

Se tiene, entonces, que al momento de presentar la demanda, la parte demandante señaló en el acápite que tituló como “COMPETENCIA” que la misma la determinaba “en virtud del domicilio de los demandados...” (Cfr.Fl.14 Archivo 03). De lo que se desprende que la gestora judicial de la parte actora, en uso de la facultad que le otorga la legislación procesal, optó por el fuero personal al que alude el numeral 1° del Artículo 28 del Código General del Proceso.

Ahora bien, es importante anotar que, tal y como lo ha expresado la Sala de Casación Civil, “...las ejecuciones para el cobro de cuotas de administración de bienes sometidos al régimen de propiedad horizontal, la determinación de la competencia no ha sido pacífica...” (Cfr. Auto AC2802 de 2020), puesto que a lo largo del tiempo el Máximo órgano de lo Civil ha gestado dos posturas: **i)** la primera, atinente a que el factor territorial en este tipo de causas se define por la concurrencia electiva de los fueros previstos en los numerales 1° y 3° del artículo 28 del CGP, quedando así, a elección del promotor de la pretensión⁷; y **ii)** la segunda que alude a que el numeral 7° del artículo 28 del CGP es el fuero territorial *privativo* a tener en cuenta, dado que el cobro de cuotas en mora se deriva de una obligación propia del derecho real de dominio (*propter rem*), y por ello la ejecución debe surtirse en el lugar de ubicación del inmueble (Cfr. Auto AC2802 de 2020⁸).

Dilucidado lo anterior, es pertinente tener presente que la Ley 675 de 2001, en su artículo 48, en punto del procedimiento ejecutivo por cuotas en mora, es clara en

⁵ “Por medio del cual se redefinen las zonas que en adelante atenderá los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín y se establecen directrices para su funcionamiento”

⁶ Cfr. Auto AC563 del 24 de febrero de 2020. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona

⁷ Cfr Autos Auto de 8 de septiembre de 2014 Rad No. 11001-02-03-000-2014-01419-00; Auto 21 de febrero de 2018 Rad No. 11001-02-03-000-2018-00253-00; Auto 12 de junio de 2019 Rad No. 11001-02-03-000-2019-01555-00. Entre otros.

⁸ Autos AC4617-2021y AC2802 de 2020

establecer que “... el título ejecutivo contentivo de la obligación (...) será solamente el certificado expedido por el administrador sin ningún requisito ni procedimiento adicional (...)”.

A su vez, tal y como lo ha explicitado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el factor territorial en este tipo de causas puede definirse por **elección del demandante**, sea ya en el lugar de cumplimiento de la obligación (numeral 3° Art. 28 CGP), o en el domicilio del demandado, como regla general (Cfr. Numeral 1° Art. 28 CGP). Así lo ha indicado la Corte en reciente decisión (Cfr. **Auto AC1102-2021**): “...En ejercicio de esa potestad la libelista acudió ante el juzgador de Medellín con sustento en que corresponde al del lugar de cumplimiento de las obligaciones, afirmación que halla respaldo en la certificación expedida por el administrador de la acreedora y anexo al infolio como título ejecutivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 675 de 2001, en el que consta que el lugar de cumplimiento de las obligaciones objeto de recaudo es Medellín, de donde se deduce que su escogencia no fue caprichosa ni infundada porque corresponde a una de esas pautas, en concreto a la prevista en el núm. 1°, artículo 28 ejusdem, lo que torna plausible la selección...”.

En línea con lo expuesto, es preciso indicar que sobre el particular se impone la determinación del factor territorial de competencia a elección del demandante, sea ya por el domicilio del ejecutado o el lugar de cumplimiento de las obligaciones; no compartiendo así el Despacho el criterio según el cual es el numeral 7° el fuero privativo determinante del factor territorial, puesto que la Ley 675 de 2001 por su parte no contempla este aspecto. Aunado a esto, tal y como lo ha señalado la Rectora de la Jurisprudencia en lo civil: “(...) [A]l juez corresponde ceñirse a lo manifestado por el demandante en el escrito introductor para efectos de establecer la competencia del mismo” (CSJ SC. Autos AC de 10 de agosto de 2010, Radicación #01056-00; de 13 de febrero de 2017, Radicación #11001-02-03-000-2017-00214; y de 7 de marzo de 2017, Radicación #0011001-02-03-000-2017-00317-00).

En ese orden, este Despacho encuentra que la regla de competencia para definir el factor territorial debe ser a elección del demandante entre el numeral 1° y 3° del CGP, tal y como el mismo órgano de cierre lo ha indicado en distintas decisiones (Auto de 8 de septiembre de 2014 Rad No. 11001-02-03-000-2014-01419-00; Auto 21 de febrero de 2018 Rad No. 11001-02-03-000-2018-00253-00; Auto 12 de junio de 2019 Rad No. 11001-02-03-000-2019-01555-00. Entre otros).

En todo caso, es preciso indicar que las providencias citadas por el Juzgado proponente del conflicto no corresponden a sentencias de casación que unifiquen jurisprudencia y que por ello constituyan doctrina probable⁹⁻¹⁰, sino que obedecen

⁹ “...la doctrina probable **proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla, unificando la jurisprudencia ordinaria nacional;** (2) del carácter decantado de la interpretación que dicha autoridad viene haciendo del ordenamiento positivo, mediante una **continua confrontación y adecuación a la realidad social** y; (3) del deber de los jueces respecto de a) la igualdad frente a la ley y b) la igualdad de trato por parte de las autoridades y; (4) del principio de buena fe que obliga también a la rama jurisdiccional, prohibiéndole actuar contra sus

a autos de Sala Unitaria que resuelven una situación específica. Es más, en el auto AC2802 de 2020, citado por la Juez se indica categóricamente que la posición no es pacífica. En tal sentido, no puede partirse de un precedente vertical vinculante que imponga un exclusivo criterio aplicable al caso bajo estudio¹¹. Es de destacarse que no se advierte la existencia de un auto de unificación por parte del Alto Órgano en lo Civil a través de la totalidad de los magistrados integrantes de la Sala de Casación Civil, como para colegir que la regla a aplicar es la prevista en el numeral 7° del artículo 28 del CGP; y de ser así, considera el Despacho la plausibilidad de apartarse en atención a la existencia de una norma especial como lo es el artículo 28.3 del CGP y el artículo 48 de la Ley 675 de 2001, lo cual guarda armonía con lo dicho en decisiones como la **AC1102-2021**, entre otras, tal y como ocurre sobre el caso bajo estudio.

En consideración a lo disertado, el Despacho constata que el Juez competente para conocer del presente procedimiento compulsivo es el **Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín**, en orden a que la parte actora optó por definir la competencia en el domicilio de la parte demandada, el cual indicó que era en la dirección: “...**Carrera 72 No. 80A-43 Interior 2201 Edificio La Toscana Medellín** (Cfr. Fl.15 Archivo 03), dirección que corresponde al Barrio Córdoba, Comuna 7 de la ciudad de Medellín según fuente digital de la Alcaldía de Medellín¹², y esta comuna fue asignada a este Juzgado a través del contenido del Acuerdo CSJANTA19-205 del 24 de mayo de 2019.

propios actos. Por otra parte, la autoridad de la Corte Suprema para unificar la jurisprudencia tiene su fundamento en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas y esta atribución implica que la Constitución le da un valor normativo mayor o un “plus” a la doctrina de esa alta Corporación que a la del resto de los jueces de la jurisdicción ordinaria. Ello supone que la carga argumentativa que corresponde a los jueces inferiores para apartarse de la jurisprudencia decantada por la Corte Suprema es mayor que la que corresponde a éste órgano para apartarse de sus propias decisiones por considerarlas erróneas.” Cfr. Sentencia C-836 de 2001.

¹⁰ “...la doctrina probable proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla, unificando la jurisprudencia ordinaria nacional; (2) del carácter decantado de la interpretación que dicha autoridad viene haciendo del ordenamiento positivo, mediante una **continua confrontación y adecuación a la realidad social** y; (3) del deber de los jueces respecto de a) la igualdad frente a la ley y b) la igualdad de trato por parte de las autoridades y; (4) del principio de buena fe que obliga también a la rama jurisdiccional, prohibiéndole actuar contra sus propios actos. Por otra parte, la autoridad de la Corte Suprema para unificar la jurisprudencia tiene su fundamento en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas y esta atribución implica que la Constitución le da un valor normativo mayor o un “plus” a la doctrina de esa alta Corporación que a la del resto de los jueces de la jurisdicción ordinaria. Ello supone que la carga argumentativa que corresponde a los jueces inferiores para apartarse de la jurisprudencia decantada por la Corte Suprema es mayor que la que corresponde a éste órgano para apartarse de sus propias decisiones por considerarlas erróneas.” Cfr. Sentencia C-836 de 2001.

¹¹ Cfr. LOPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El Derecho de los Jueces. Pág 214. Editorial LEGIS (2009).

¹² <https://www.mcdellin.gov.co/geomedellin/index.hyg>

Radicado: 05001 31 03 019 2022 00027 00

Procedimiento: Conflicto negativo de competencia.

Proponente: Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín.

Convocado: Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín

En atención a lo expuesto el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medellín,

RESUELVE

Primero: Declarar que el **Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín** es el competente para conocer del proceso ejecutivo de Mínima cuantía de la referencia.

Segundo: Se ordena la remisión del expediente a dicho juez competente.

Tercero: Comunicar esta decisión al **Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín**.

NOTIFÍQUESE
ÁLVARO ORDOÑEZ GUZMÁN
JUEZ

6

Firmado Por:

Alvaro Eduardo Ordoñez Guzman
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 019
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 535ae6c2cc328374f8d67340042ff8cfc0abaacc16c7496ac91687552b210917

Documento generado en 04/02/2022 10:28:23 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>